



## **Estudio del CURI**

### **LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER Y LA SOBERANÍA ESTATAL**

*Heber Arbuet-Vignali  
Washington Baliero Silva*

*Consejo Uruguayo  
para las Relaciones Internacionales*

*20 de febrero de 2018*

*Estudio N° 1/18*

El CURI mantiene una posición neutral e independiente respecto de las opiniones personales de sus Consejeros. El contenido y las opiniones de los “Estudios del CURI” y “Análisis del CURI” constituyen la opinión personal de sus autores.

# LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER Y LA SOBERANÍA ESTATAL

Por Heber Arbuét-Vignali<sup>1</sup> y Washington Baliero Silva<sup>2</sup>

Febrero 2018

**Índice.** Resumen 1. Presentación del tema 2. El marco político u jurídico en que aparece la responsabilidad de proteger: a. El marco político internacional b. el marco jurídico internacional. 3. Que desencadena la búsqueda de la Responsabilidad de Proteger. 4. Los fundamentos jurídicos del instituto/doctrina: a. El origen; b. El Informe Kofi Annan 2000; c. La unidad Africana; d. El informe CIISE; e. Informe del Grupo de Alto Nivel; f. Informe Kofi Annan 2006; g. Cumbre mundial 2005; h. Resolución A/63/308. 5. El Consejo de Seguridad y la Responsabilidad de Proteger: a. El recibo del instituto; b. Sudán, el caso Darfur; c. Kenia. Crisis del 2007/08; d. Libia; e. Siria; f. Costa de Marfil; g. Yemen; h. Sudán-Sudán Sur; i. Malí; j. República Centroafricana; k. El Califato del Estado Islámico. 6. La responsabilidad de proteger en otros órganos y conclusiones respecto a todos: a. Actividad del Secretario General; b. Actividad de la Asamblea General; c. Conclusiones a los numerales 5 y 6. 7. La obligación de proteger: naturaleza y vínculos jurídicos: a. las carencias del Consejo de Seguridad; b. El Principio de No intervención; c. El deber de no intervención; d. La “intervención humanitaria” 8. La Responsabilidad de Proteger, la no intervención y la soberanía: a. Responsabilidad de Proteger y la no intervención; b. Obligación de proteger y soberanía: i. Planteo de la situación: ii. Las posiciones doctrinarias; iii. Lo que resulta de las actividades de la Organización; c. Nuestra posición respecto a estos puntos. Obras citadas.

**Resumen.** La Responsabilidad de Proteger es un nuevo instituto del Derecho Internacional Público, producto de la influencia de la civilización posmoderna en este y, en especial, de la sensibilidad que ella despierta para la atención del bienestar y la dignidad de los seres humanos. Aunque en las grandes líneas se coincide se han suscitado discusiones acerca de la forma en que la idea de soberanía pueda afectar la eficacia de la puesta en práctica de la protección.

---

<sup>1</sup> Antigo Catedrático de Derecho Internacional Público y antiguo Catedrático de Historia de las Relaciones Internacionales de Facultad de Derecho UdelaR; miembro del Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales (CURI) y Director del mismo; premio CONICYT a la investigación jurídica, Nivel III, 1999-2003.

<sup>2</sup> Arbitro del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur; Antigo Profesor Agregado de Derecho Internacional Público y antiguo Director del Instituto de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho UdelaR; antiguo Profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad Católica del Uruguay.

Sostendremos que esas discusiones son ociosas, que la idea jurídica de soberanía no se opone sino que es el origen de institutos tales como el que nos ocupa y que las dificultades a estos las crea su inserción en sistemas con estructuras de coordinación puras, como lo es el permisivo Derecho internacional Público.

## 1. Presentación del tema.

En la peculiar terminología de las relaciones internacionales se denomina “Responsabilidad de Proteger” (R2P), a un instituto, o, más bien a una doctrina, nacida en la Cumbre Mundial de Jefes de Estado y de Gobierno realizada en Nueva York entre el 14-16 de septiembre del 2005, como continuación de la Cumbre del Milenio del 2000, a la que asistieron representantes de los 191 países por entonces miembros de la Organización mundial <sup>3</sup> y que se concreta en los párrafos 138 y 139 de su Documento final <sup>4</sup>.

Las bases sobre las que se desarrolla esta idea, sus tres claros pilares, son simples y compartibles: \*) Los Estados tienen la responsabilidad primaria de proteger a su población del genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y las depuraciones étnicas <sup>5</sup>; \*) La comunidad internacional tiene la responsabilidad

---

<sup>3</sup> Ahora son 193 Estados miembros plenos más dos Estados miembros observadores: Palestina y Vaticano.

<sup>4</sup> 138. Cada Estado es responsable de proteger a su población del genocidio, los crímenes de guerra, las depuraciones étnicas y los crímenes de lesa humanidad. Esa responsabilidad conlleva la prevención de dichos crímenes.....Aceptamos esa responsabilidad y convenimos en obrar en consecuencia. La comunidad internacional debe...alentar y ayudar a los Estados a ejercer esa responsabilidad y ayudar a las Naciones Unidas a establecer una capacidad de alerta temprana. 139. La comunidad internacional, por medio de Naciones Unidas, tiene también la responsabilidad de utilizar medios diplomáticos, humanitarios y otros medios pacíficos apropiados, de conformidad con los Capítulos VI y VIII de la Carta, para ayudar a proteger.....En este contexto estamos dispuestos a adoptar medidas colectivas...por medio del Consejo de Seguridad con la Carta incluido su Capítulo VII...en colaboración con las Organizaciones regionales pertinentes...si los medios pacíficos resultan inadecuados y es evidente que las autoridades nacionales no protegen a sus poblaciones del genocidio,.....teniendo en cuenta los principios de la Carta y el derecho internacional. También tenemos intención de...ayudar a los Estados a crear capacidad para proteger a su población del genocidio...”

<sup>5</sup> **Genocidio.** Es un delito internacional, cuyos límites no están aún totalmente definidos y en los cuales inciden sentimientos muy entrañables, como el del holocausto y el genocidio armenio, entre otros, pero que poco contribuyen a una definición jurídica precisa. La Real Academia Española lo caracteriza como “el exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivos de raza, religión o política”, otros agregan los motivos de etnia o nacionalidad. Jurídicamente, en el momento actual, debemos recurrir a las tipificaciones de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948 y, especialmente a la definición del art. 6 del Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998, que dicen: “Se entiende por genocidio, cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal...”; y enumera: matanzas o lesiones graves físicas o psicológicas al grupo; sometimiento del mismo a condiciones de existencia que conduzcan a su destrucción física total o parcial; medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo o el traslado forzado de niños del grupo a otro. El sujeto pasivo es el grupo humano y resalta la

de alentar a los Estados y ayudarlos a cumplir el cometido señalado; \*) Si los Estados, en forma manifiesta, no protegen a sus ciudadanos de los mencionados crímenes, y las medidas pacíficas para contenerlos han fracasado, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de actuar <sup>6</sup> a través de medidas colectivas y coercitivas como las sanciones económicas o las diplomáticas e, incluso, aunque sólo como último recurso mediante el uso de la fuerza armada de conformidad con la Carta de Naciones Unidas.

Este posicionamiento, reacciona frente a circunstancias ciertamente abominables a las que suelen ser sometidos los seres humanos insertos en las sociedades estatales y procura abrir una vía para librarlos de sus calamidades. Esta propuesta es totalmente compartible, pero también merece un riguroso estudio desde los puntos de vista político y jurídico internacionales. Además intentaremos el análisis de las relaciones entre la R2P y el concepto de soberanía estatal, ya que en algunas de sus fundamentaciones se pretende redefinir a ésta como “soberanía

---

importancia del elemento subjetivo: la intención de destruirlo total o parcialmente. **Crímenes de guerra.** El art. 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional dispone que lo son las “Infracciones graves a los Convenios de Ginebra del 12/08/949, realizadas como parte de un plan o política, o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes”: homicidios; torturas u otros tratos inhumanos incluidos experimentos biológicos; causar grandes sufrimientos o atacar contra la integridad física o la salud; destrucción y apropiación de bienes en forma ilícita, en gran escala y arbitrarias; forzar a prisioneros o a personal protegido a servir en las fuerzas armadas o privarlos de juicio legítimo e imparcial; la toma de rehenes. También son crímenes de guerra las violaciones graves “...de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales, dentro del marco del Derecho Internacional...” que se enumeran en el literal b del art. 8. Y, en caso de conflictos no internacionales (internos), los que se enumeran en el literal c y sean cometidos contra personas que no participan de las hostilidades o depusieron las armas, están herido o enfermos. **Crímenes de lesa humanidad.** De acuerdo al art.7 del Estatuto, lo es “...cualquiera de los actos siguientes, cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque...”: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación o traslado forzado; privación de libertad; torturas; violación y otras agresiones sexuales; persecución por razones políticas, raciales, nacionales, étnicas, culturales, religiosas, de género u otras inaceptables; desapariciones forzadas; crimen de apartheid; u otras prácticas inhumanas que atenten contra la integridad física o la salud mental. **Limpieza étnica.** Resulta una idea de difícil concreción y diferenciación de otros conceptos similares. Para Naciones Unidas se da al actuarse para concretar un área étnicamente homogénea mediante la fuerza o la intimidación, para eliminar de una determinada zona a personas de cierto grupo étnico o religioso. Podría intentar definirse como la expulsión forzada y en masa de un territorio en el que se procura homogeneidad étnica, de una población indeseable por razones de raza, religión, políticas, culturales u otras similares, o por consideraciones de carácter políticos, estratégicos o ideológicos, por medio de deportaciones, desplazamientos forzados o asesinatos en masa o su amenaza, procurando la eliminación de su evidencia física y cultural dentro de tal espacio; es la eliminación sistemática y violenta de los grupos étnicos no deseados en determinado territorio.

<sup>6</sup> Aunque en ocasiones se ha recurrido a la expresión “intervenir” preferimos el uso de la voz actuar por ser más oportuna y correcta. Cuando en las relaciones internacionales se ha utilizado la voz intervenir siempre se le ha vinculado con actos ilícitos, violatorios del Derecho Internacional Público, lo que era congruente porque esos actos vulneraban el Principio de No Intervención; esto es así incluso cuando se tratara de “intervenciones humanitarias” (ver Infra Numeral 7, literales b, c y d, y también H.Arbut-Vignali 2012).

funcional”, vale decir, soberanía como poder-deber, en suma, soberanía como responsabilidad de cumplir todas las funciones de un Estado, que si no se ejercen se pueden perder <sup>7</sup>. Esta concepción conmueve un pilar básico del llamado Derecho Internacional clásico, que, aunque incurriéndose en grave error, todavía continúa sintiéndose como vigente por buena parte de la doctrina, está muy arraigado en la práctica de los Estados y fuertemente enraizado en el sentir de los pueblos <sup>8</sup>. Para comprender la razón del fortalecimiento de la idea de la R2P, es necesario tener en cuenta: la situación en que se encuentra la sociedad internacional posmoderna; los temores que han despertado las grandes calamidades, que sensibilizaron al común de las gentes propiciando esta propuesta; las carencias del actual sistema de seguridad colectiva a nivel mundial; los intentos fallidos, como las “intervenciones humanitarias” y varios acontecimientos recientes en las relaciones internacionales.

Por ello analizaremos las relaciones entre la idea de “Responsabilidad de Proteger” y el atributo de la soberanía, base y fundamento del sistema pre jurídico que reguló a nivel mundial las relaciones internacionales hasta mediados del siglo XX, y también del Derecho Internacional Público. Atender las opiniones de la doctrina al respecto y considerar si ambos conceptos son compatibles. Analizar si el actual sistema se adecua con la realidad posmoderna y es capaz de dar respuesta a los problemas que esta plantea. Y, en una última profundización, meditar si es o no necesario enmarcar las relaciones internacionales a nivel mundial, al menos en ciertas áreas muy importantes desde el punto de vista humanitario, en el marco de un sistema jurídico diferente del actual. El Derecho Internacional Público centra el protagonismo, el poder y la fuerza en los Estados nacionales y debe considerarse si no sería mejor ir hacia otro sistema que ubique esas determinantes en la sociedad internacional, a partir de la valoración de los seres humanos individuales que la componen, situándolos por encima de los grupos gobernantes que toman las decisiones en su nombre.

---

<sup>7</sup> Francis Deng, 1996, y otros internacionalistas acuñaron el concepto de “soberanía como responsabilidad” en un libro que data de 1996, destacando que la soberanía no es sólo un derecho, sino también una obligación, la de cumplir todas las funciones del Estado hacia su pueblo, y que si no las cumple apropiadamente, el derecho o derechos derivados de aquella se pierden; “Sovereignty as responsibility”, Este concepto es retomado en el Informe de la CIISE del 2001.

<sup>8</sup> Es prueba de ello que en ninguna de las muchas resoluciones en que la Asamblea General y el Consejo de Seguridad que han referido y aún aplicado la R2P, se haga mención alguna a la cuestión de la soberanía como responsabilidad.

## **2.- El marco político y jurídico en que aparece la Responsabilidad de Proteger.**

**a.- El marco político internacional.** La sociedad internacional, como conjunto de sujetos inter actuantes a nivel mundial, que siguen ciertas reglas acordadas y con un entramado organizativo cada vez más complejo, aparece junto con los Estados nacionales, en el entorno temporal de los tratados de Westfalia en 1648. Funcionó hasta recién entrado el siglo XX, con carencia de autoridades generales efectivas, con algunas reglas de fuente consuetudinaria interpretadas y armonizadas por la doctrina (Grocio, Wolff, Vattel, etc.) y con el protagonismo exclusivo y excluyente de los Estados nacionales, los que de alguna forma acordaban sus intereses sobre algunas, pocas, materias absolutamente excluidas y diferentes de las que se ocupaban en sus ámbitos internos <sup>9</sup>, lo que hacían a partir de escasas reglas y recurriendo al Principio político del Equilibrio de Poderes de los Estados y de un concepto de soberanía absoluta extraído de la teoría política <sup>10</sup>. Esta situación se prolongó, aunque registrando avances parciales, hasta después de la Segunda Guerra Mundial y, tal vez, hasta un cuarto de siglo más allá. Con seguridad a partir de las décadas del 1970/80', los avances de la ciencia y la tecnología cambiaron el mundo, perforaron sus fronteras, informaron en tiempo real, hicieron aparecer otros actores en las relaciones internacionales (los movimientos nacionales de liberación, las grandes compañías y los grupos de

---

<sup>9</sup> Seguridad; guerra, neutralidad y paz; fronteras; relaciones diplomáticas y protección de nacionales; regulación de espacios comunes, como el alta mar; responsabilidad del Estado; y pocos asuntos más.

<sup>10</sup> En este marco político la soberanía se identifica con la capacidad de poseer de hecho, los recursos que permiten acceder a la disposición del poder necesario para disponer de un mando absoluto, irrestricto, capaz de imponer su voluntad a todo otro Estado: políticamente, la soberanía es un atributo fáctico que permite conocer, poseer y ejercer las condiciones necesarias para obtener tal poder, conservarlo y acrecentarlo. Esta no puede ser la respuesta de las ciencias jurídicas; para estas la soberanía de los Estados es un atributo jurídico que justifica por legitimación, en el ámbito interno, a un poder ordenador supremo, pero condicionado en su ejercicio y, en las relaciones internacionales, a un poder ordenador coordinado, creado y ejercido por la sociedad internacional de estados soberanos, originado en los poderes coordinados de ellos mismos, con el propósito de que, en conjunto, regulen la convivencia internacional mediante normas obligatorias que, por la manera en que se crean y aplican, no afectan el atributo paradigmático de la soberanía de los Estados. Es así como, a partir de la Carta de Naciones Unidas, actúa el Derecho Internacional Público que regula a la comunidad internacional. Su marco se encierra en esos límites y no puede ir más allá; pero el sistema también permite, y esto debe tenerse en cuenta, crear otro tipo de estructuras jurídicas que, a partir de la voluntad soberana de los Estados, transiten hacia una normativa cuya fuerza ya no se funde solo en el Principio de Soberanía, y que se base también en otros, como el Principio de la Supranacionalidad; admitiendo así, en ciertas materias y por un tiempo determinado, someter a los Estados a un mando superior. Ver H.Arbut-Vignali, 2009 y 2015 t/p.

intereses transnacionales, las mafias internacionales, los seres humanos individuales y otros), el mundo jurídico dual terminó y la regulación de la inmensa mayoría de las materias se hizo internacional y nacional. El sistema jurídico tenía que adaptarse, ha intentado hacerlo pero por vías equivocadas y se debe tomar conciencia de cuál es el sendero correcto (ver H.Arbut-Vignali 2011/5).

**b. El marco jurídico internacional.** El sistema de reglas que, mal o bien, reguló y encausó las relaciones internacionales mundiales desde Westfalia a mediados del siglo XX, fue el pre Derecho Internacional Público, fundado y desarrollado a partir del Principio de la Soberanía de los Estados que se manifestaba en el espíritu de los tratados de Westfalia, 1648, se expresaba en los tratados de Utrech, 1703-13, se recogía en el Pacto de la Sociedad de las Naciones y que recién se cambiará en el art. 2 inc. 1 de la Carta de las Naciones Unidas 1945 por el Principio de la Igualdad Soberana de los Estados, con el cual se posibilita el establecimiento de un sistema de reglas de naturaleza jurídicas para regular a los Estados soberanos en sus relaciones internacionales. Entre los siglos XVII y XIX, el fuerte sentimiento de individualidad independiente de los Estados nacionales, la carencia de autoridades internacionales de alcance mundial, o tan siquiera regional, las escasas normas jurídicas internacionales, su origen consuetudinario que propiciaba su falta de formas definidas y su ambigüedad, y la carencia de órganos jurisdiccionales <sup>11</sup> determinó que la sociedad internacional viviera en estado casi de naturaleza, apenas poco civilizado: con solo escasas reglas pre jurídicas, sin autoridades efectivas y basando la seguridad en el Principio de Auto Tutela. Si a esto agregamos que el concepto de soberanía que recibe el pre Derecho Internacional Público lo toma prestado de las ciencias políticas, nos explicamos todas las dudas doctrinarias acerca de la naturaleza jurídica del “derecho internacional” y la posición de sus negadores (ver H.Arbut-Vignali 2005). La sociedad internacional recién entrará en estado civilizado a partir de Naciones Unidas después de la cual contará con normas jurídicas, en su mayor parte convencionales, para todas las materias y con autoridades reconocidas universalmente. Pero en el debe quedan algunas cosas: se está en estado de

---

<sup>11</sup> Salvo la tardía aparición del arbitraje internacional entre Estados en la década del 1860: caso Carolaine.

naturaleza pero de guerra <sup>12</sup> por la falta de órganos jurisdiccionales obligatorios en todos los casos y con imperio en todos los ámbitos; no se dispone de un sistema de seguridad colectiva eficiente, por lo cual, en la práctica real, se continúa recurriendo al Principio de Auto Tutela; se sigue pensando que el instrumento útil para regular los nuevos desafíos de la posmodernidad es el Derecho Internacional Público, cuando él no sirve para muchos de ellos y debe irse hacia otro fundado en el Principio de la Supranacionalidad; y no se ha asumido que, para que la normativa internacional constituya propiamente un sistema jurídico, hay que darle a la soberanía un significado también jurídico (ver H.Arbut-Vignali, 2013/2).

### 3.- Qué desencadena la búsqueda de la Responsabilidad de Proteger.

Las consecuencias de las fallas estructurales de la organización política y de las incongruencias del sistema jurídico que encausan y regulan a la sociedad internacional, han hecho aflorar un inconformismo creciente en los grupos humanos que la componen y que, ahora pretenden y exigen otro tipo de respuestas de sus autoridades <sup>13</sup>. Ya no son tolerables: las hambrunas en regiones de cualquier parte del mundo, ni el menosprecio a la dignidad humana de algunos radicalismos ideológico religiosos o políticos, ni la crueldad contra sus pueblos de algunos conductores como Gadafi o El Asad, ni las monstruosidades del terrorismo internacional, las de Boko Haram o las del Califato del Estado Islámico; y un largo etcétera. En el caso que nos ocupa, las preocupaciones empiezan a aparecer al finalizar la “guerra fría”, y los detonantes que sensibilizaron a la sociedad internacional fueron el genocidio de Ruanda de 1994 y la masacre de Srebrenica de 1995 <sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> Según la concepción de J.Locke, 1690, para quién, para estar en estado civilizado y de paz es necesario disponer de normas, de autoridades y, entre estas, de autoridades jurisdiccionales capaces de zanjar todos los conflictos.

<sup>13</sup> Esto también es consecuencia de los avances científicos y tecnológicos de la postmodernidad: el mundo se empequeñeció, todos pueden transitar por todos lados y ver las cosas como son; ya no hay problemas ajenos, ni distantes pues tomamos conciencia de ellos en tiempo real y con imágenes; nada deja de afectarnos a todos por la interdependencia del mundo y el efecto dominó de los hechos. La resignación y la ajenidad ante los acontecimientos ya no es posible; se ha avanzado mucho, pero no es suficiente y se desea más.

<sup>14</sup> Estos son los dos hechos de mayor impacto y enorme maldad más cercanos a la Cumbre Mundial de Jefes de Estados y de gobierno del 2005. **Genocidio en Ruanda 1994.** El país tenía menos de 8 millones de habitantes: los twas, pigmeos cazadores de la montaña, los hutus, agricultores, mayoría con un 80 % de la población y los tutsis, ganaderos, con un 15 %; entre los dos últimos grupos no hay diferencias étnicas, ni lingüísticas, ni religiosas aunque desde el siglo XIV han existido tensiones y enfrentamientos; en 1934, Bélgica, potencia administradora en sustitución de Alemania, instituyó un carnet étnico que los catalogaba. En abril 1994 el avión del jefe de Estado,

#### 4.- Los fundamentos jurídicos del instituto/doctrina.

**a.- El origen.** Como ya se señalara, fue un autor africano, el sudanés Francis Deng, 1996 (ver supra llamada 7), con el apoyo de otros doctrinos mayoritariamente de ese origen, el primero que se ocupara sistemáticamente de esta cuestión, dentro de un Continente especialmente afectado por las catástrofes humanitarias y las reiteradas fallas o ausencias del poder estatal. No en balde es la región del planeta donde más se encuentran los que se ha dado en llamar “Estados fallidos”. Esta idea también viene a entroncar con la tradicional concepción occidental de la necesidad de las “intervenciones humanitarias”.

**b.- Informe Kofi Annan 2000.** En su Informe del año 2000, denominado “Nosotros los Pueblos. La función de las Naciones Unidas en el siglo XXI”, preparado para la Cumbre del Milenio, que tendría

Figura 1. Mapa actual de Ruanda.



considerado hutu es abatido muriendo este. Se desata una persecución que dura 5 meses: dónde muere el 11 % de la población, unas 800.000 personas, de las cuales el 80 % son tutsis, pero también cayeron y fueron perseguidos hutus moderados. Se refugiaron en R.D.Congo, Tanzania, Burundi y Uganda unas 2.690.000 personas y se desplazaron otro millón. **Genocidio de Srebrenica 1995.** Entre el 13 y 22 de julio, en esta ciudad de Bosnia Herzegovina, situada al este del país, sobre la frontera con Serbia, se había constituido la República de Srpska; el ejército de esta República (VRS) y grupos de paramilitares serbios asesinaron en masa a 8.372 bosnios musulmanes (varones, mujeres, adolescentes, niños y ancianos), por fusilamiento y con el propósito de limpiar étnicamente a la ciudad. Se trataba de una zona supuestamente segura y así declarada, bajo la custodia de 400 Cascos Azules.

Figura 2. Situación de Srebrenica dentro de Bosnia Herzegovina.



lugar en ese mismo año, el entonces Secretario General Kofi Annan, luego de hacer hincapié en el fenómeno de la mundialización y de expresar que se trata de sacar el mayor provecho de la misma evitando sus efectos adversos, manifiesta que los Estados deben aprender a gobernar mejor y juntos sin que ello signifique el surgimiento de “un Gobierno mundial ni el eclipse de los Estados nación” (el subrayado nos pertenece), pero, no obstante esto, bajo el acápite de “El dilema de la intervención”, enfatiza que “ningún principio puede invocarse, ni siquiera la soberanía, (de nuevo, el destaque nos corresponde)\_para impedir una acción armada autorizada por el Consejo de Seguridad en caso de violaciones masivas de derechos humanos que constituyan catástrofes humanitarias”.

Se advierte claramente en estas formulaciones la concreción de un nuevo concepto de paz y seguridad actualmente muy en debate en Naciones Unidas, que emigra del de paz y seguridad colectiva, exclusivamente interestatal, a uno nuevo de seguridad humana como propósito fundamental de la Organización. Sería éste, como enseñaba hace 55 años el maestro Eduardo Jiménez de Aréchaga, un nuevo e importante desarrollo constitucional de la Carta.

**c.- La Unidad Africana.** El tratado que crea la Organización de la Unidad Africana (OUA) en 2002 contiene disposiciones, sus artículos 3, h) y de modo

especialísimo el 4, h), que facultan a la Organización a intervenir (sic) en sus Estados miembros, usando incluso la fuerza armada, para proteger poblaciones que sean víctimas de crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad; será el primer tratado constitutivo de una Organización Internacional que la autoriza a actuar en el territorio de sus miembros en tales casos <sup>15</sup>. Se denota claramente, a nuestro juicio, que en esta convención se tuvo especialmente en cuenta el Informe del CIISE del año anterior. Por ello no debería extrañar la propuesta que formulara la misma Organización que formulara en el año 2000 ante la Asamblea General.

**d.- El Informe CIISE.** El Informe de la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados (CIISE) de diciembre del 2001, es el documento más elaborado y en el que más sistemáticamente busca fundar la doctrina/instituto de la Responsabilidad de Proteger. Como lo anuncia en su Prefacio, trata la cuestión de si es jurídicamente de recibo que los Estados adopten medidas coercitivas y particularmente llegar a las de naturaleza militar, contra otro Estado, para proteger personas que corren grave peligro en ese Estado, en ciertos casos muy especiales; en definitiva, se aboca a establecer si existe “el derecho a la intervención humanitaria” y en caso afirmativo, a cual es la forma y momento de ejercerlo, así como a la cuestión de quién podría autorizarla.

El grupo de trabajo que lo produjo actuó en principio por fuera de la ONU, a iniciativa de Canadá; sin embargo anunció su constitución a la Asamblea General. Pretendió dar respuesta a los llamamientos que hiciera el Secretario K. Annan ante la misma, en los períodos de sesiones 1999 y 2000, para que se buscara un nuevo consenso sobre si la intervención humanitaria era un ataque inaceptable a la soberanía estatal y, en tal caso, cómo debería responderse en situaciones como las de Ruanda y Srebrenica y, en general, en los casos de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos que transgredieran todos los principios que comparte la humanidad.

---

<sup>15</sup> El artículo 4, h) dice “el derecho de la Unión a intervenir en un Estado miembro de conformidad a la decisión de la Asamblea, respecto a circunstancias graves tales como crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad”.

El centro del Informe está puesto en la “Responsabilidad de Proteger” y busca, deliberada y expresamente, no referirse a “intervención”. Se constituyó en un insumo importante tomado en cuenta por el Informe del Grupo de Alto Nivel, este sí formado a instancias del Secretario General K. Annan, que se denominó “Un Mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos”; que a su vez se considerará especialmente en el Informe del Secretario elevado a la Cumbre Mundial del 2005. Los tres pilares de la R2P (ver supra, Numeral 1, párrafo 2) para la CIISE: en las obligaciones inherentes al concepto de soberanía; en el artículo 24 de la Carta de la ONU sobre las potestades del Consejo de Seguridad; en las obligaciones que tienen todos los Estados en materia de derechos humanos que surgen de declaraciones, tratados, pactos, del derecho internacional humanitario y de sus propios derechos internos; y por último, de la propia práctica de los Estados, de las Organizaciones Internacionales universales y regionales y del Consejo de Seguridad. Sus elementos constitutivos, son la responsabilidad de prever la ocurrencia de tales violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, la de reaccionar y la de reconstruir. El informe es particularmente cuidadoso al expresar que la “intervención” militar debe ser excepcional y extraordinaria, una “última” ratio, sólo justificable ante catástrofes humanitarias de gran alcance y observándose principios precautorios severos y exhaustivos.

Se vincula con esto el asunto que pretendemos tratar, el del fundamento que se pretende dar a la doctrina de la Responsabilidad de Proteger, el que se relaciona con un “nuevo” significado de la soberanía estatal como responsabilidad o como función, y consecuentemente, una nueva interpretación del principio de la intervención.

**e.- Informe del Grupo de Alto Nivel.** Otro hito a destacar en la formulación de la R2P lo constituye el Informe del Grupo de Alto Nivel sobre las amenazas, desafíos y el cambio, de 2 de diciembre de 2004, que se denominó “Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos” (documento A/59/565) elaborado a instancias de Kofi Annan, que entre otros asuntos relativos al fortalecimiento del accionar de las Naciones Unidas, recomienda se adopte una norma sobre la “Responsabilidad de Proteger”, que entiende debe ser actualizada por el Consejo de Seguridad en el ejercicio de sus potestades basadas en la Carta, cuando en el

caso de graves catástrofes humanitarias el gobierno de un Estado soberano “no haya podido o querido intervenir”.

**f.- Informe Kofi Annan 2005.** El antecedente inmediato de la Declaración de la Cumbre del 2005 está constituido por el documento que elevara Kofi Annan como insumo para la misma, claramente basado en los reseñados en los literales d) y e) precedentes: “Un concepto más amplio de la libertad: Desarrollo, Seguridad y Derechos Humanos para todos.

**g. Cumbre Mundial 2005.** Culmina el ciclo con el Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005, Resolución de la Asamblea General (A/Res/60/1), aprobada por consenso, que en sus párrafos 138 y 139, dentro del Capítulo titulado “Responsabilidad de Proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad”, incorpora el instituto y da las pautas para su ejercicio. Si bien de la lectura de estos dos párrafos no se infiere la adopción clara y literal por parte de la Asamblea del concepto de la soberanía estatal como responsabilidad, o funcional, o como poder-deber que fundamentaría la Responsabilidad de Proteger, sí puede entenderse claramente que todos los Estados, cada Estado dice la Declaración, aceptan su obligación de proteger a sus poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad y que este compromiso supone su prevención y la no incitación a su comisión. También establece que la comunidad internacional debe alentar y ayudar a los Estados a cumplir esta responsabilidad y a las Naciones Unidas a estar en capacidad de una alerta temprana.

Y es el segundo párrafo, el 139, el más relevante a los efectos de este trabajo, se expresa que la comunidad internacional por medio de las Naciones Unidas tiene la responsabilidad de utilizar todos los medios pacíficos, de conformidad a los Capítulos VI y VIII de la Carta, para la protección de las poblaciones en riesgo. Y agrega que “estamos dispuestos” a actuar en ese contexto, tomando medidas colectivas, oportunas y eficaces por medio del Consejo de Seguridad, incluso con las facultades del Capítulo VII (vale decir, aún con el uso de la fuerza armada) en cada caso concreto, cuando los medios pacíficos resulten inadecuados y si “...es evidente que las autoridades nacionales no protegen a su población del genocidio,

los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad”  
(subrayado nuestro).

Se destaca la necesidad de que la Asamblea siga con el examen del instituto, se reconoce que es una cuestión aún abierta, que necesita mayores estudios y desarrollos y los Estados signatarios se comprometen también a ayudar a crear capacidades para la protección. La doctrina/instituto dispone una primera etapa donde cada Estado es responsable de proteger a su población de la ocurrencia de los crímenes estipulados. En una segunda etapa lógica, que no tiene que ser necesariamente una secuencia cronológica, la comunidad tiene el deber de alentar y ayudar a los Estados a cumplir con esa obligación. Y tercero, se establece la responsabilidad de la comunidad internacional, por medio de las Naciones Unidas, de utilizar medidas colectivas eficaces, de actuar <sup>16</sup> incluyendo el uso de la fuerza armada y por medio del Consejo de Seguridad, cuando las autoridades nacionales no actualicen su deber de protección. Por autoridades nacionales debe entenderse los Gobiernos de los Estados, y en puridad, se refiere a los Estados mismos. O sea, que se está habilitando al Consejo para hacer uso de la fuerza armada en el territorio de un Estado, o a autorizarlo, para la protección de la población desprotegida por ese mismo Estado. La Asamblea no funda esto en una de soberanía funcional distinta de la que se acepta como resultado del Principio de la Igualdad Soberana de los Estados, basamento del Derecho Internacional Público y de la propia Organización, (artículo 1.7); pero está autorizando a que actúe dentro del territorio de un Estado soberano, sustituyéndose a sus poderes de gobierno, e incidiendo en uno de los corolarios más importantes de la soberanía: el de la supremacía territorial.

**h.- Resolución A/63/308.** Para finalizar esta reseña de los fundamentos de la Responsabilidad de Proteger debe mencionarse la Resolución de la Asamblea General A/63/308, de 14 de setiembre de 2009, referida al Informe del Secretario General Ban Ki-Moon denominada “Implementando la Responsabilidad de Proteger” <sup>17</sup>, que es adoptada por consenso. En ella se reafirman los principios y

---

<sup>16</sup> Lo que no sería “intervenir” en el sentido de la prohibición del artículo 2.7 de la Carta.

<sup>17</sup> El Informe de Ban-Ki-Moon sostiene, en lo que interesa a este trabajo, que la R2P se deriva de la noción de “soberanía como responsabilidad” y que este concepto no menoscaba la soberanía, sino que la refuerza.

propósitos de la Carta; se recuerda la Declaración de la Cumbre del 2005, específicamente sus párrafos 138 y 139; se toma nota del precitado informe del Secretario y de los debates producidos en la Asamblea <sup>18</sup>; y se decide continuar la consideración de la Responsabilidad de Proteger.

## **5.- El Consejo de Seguridad y la Responsabilidad de Proteger.**

**a.- El recibo del instituto.** El Consejo de Seguridad recibió tempranamente al instituto como instrumento para utilizar en los casos de necesidad de proteger a los civiles en ocasión de conflictos armados. En la Resolución 1674 del 28 de abril de 2006 sobre protección a estos civiles, se reafirman resoluciones anteriores (1265/99, 1290/00 y 1631/05), así como los Principios de independencia política, igualdad soberana e integridad territorial de los Estados; se deplora que la gran mayoría de las víctimas de conflictos armados sean los civiles y se reafirma que los contendientes “...tienen la responsabilidad primordial de...asegurar la protección de los civiles afectados”. Recuerda su responsabilidad en el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales y “Refirma las disposiciones de los párrafos 138 y 139 del Documento Final de la cumbre Mundial 2005, respecto de la Responsabilidad de Proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, las depuraciones étnicas y los crímenes de lesa humanidad” (subrayado nuestro). Y exige luego a quienes corresponda una serie de medidas. En 2009, al conmemorarse los 10 años de que el Consejo se ocupa de la seguridad de los civiles en los conflictos armados y 60 de las Convenciones de Ginebra, dicta la Resolución 1894, del 11 de noviembre, dónde también reafirma la procedencia de los párrafos 138 y 139 y recuerda que las partes en conflictos armados tienen la Responsabilidad de Proteger. Más adelante, en casos puntuales, el Consejo de Seguridad volverá a referirse a la Responsabilidad de Proteger para respaldar sus mandatos.

**b.- Sudán, el caso Darfur.** La Resolución 1706 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del 31 de agosto de 2006, adoptada dentro del marco del Capítulo

---

<sup>18</sup> Para obtener el consenso de los Estados presentes en la Asamblea se quitó “with appreciation”, es decir, la nota de aprecio al Informe, que podía implicar aceptación de conceptos que los Estados no estaban dispuestos a recibir, ni siquiera en forma tácita. Pensamos que esto iba dirigido precisamente al concepto de soberanía como responsabilidad.

VII de la Carta, es la primera que, en un caso concreto, puede vincularse con la Responsabilidad de Proteger ya que, en sus fundamentos, se recuerda la Resolución “...1674 (2006), relativa a la protección de los civiles en los conflictos armados, en la que se reafirma entre otras cosas, lo dispuesto en los parágrafos 138 y 139 del Documento Final de la cumbre Mundial 2005...”. Sobre estas bases, superado el enfrentamiento en Sudán y firmado un acuerdo de cese de hostilidades, el Consejo de Seguridad decide elevar a 17.300 los efectivos militares de la Misión de la ONU para Sudán (UNMIS), para vigilar el cumplimiento por las partes del cese del fuego y el acuerdo de paz (que se concretará en 2007), instruyéndola para “...impedir que grupos armados obstaculicen el acuerdo de paz y proteger a los civiles...retirar o recoger armas...” y otras tareas (los subrayados son nuestros).

Figura 3. Ubicación de Darfur <sup>19</sup>.



<sup>19</sup> La región de Darfur (hogar de los Fur), es actualmente la parte occidental de Sudán, pero fue un sultanato independiente hasta 1916 en que se incorporó al Sudan Anglo Egipcio. Está habitado por los Fur, los Malasi y otras etnias de razas negras dedicadas a la agricultura y por la tribu Abala, árabes criadores de camellos; la mayoría de ambos grupos son musulmanes. Los conflictos, de larga data, principalmente han sido por el dominio de los recursos hídricos; en estos enfrentamientos y respaldando a los árabes intervino el grupo de milicianos Yanyauid. Se calcula que se produjeron 350.000 muertos y 2.700.000 desplazados o refugiados. El 1º de octubre de 2007 se llegó a un acuerdo bajo el manto de Naciones Unidas que desplegó 26.000 cascos azules.

**c. Kenia. Crisis del 2007/08.** Es un país multiétnico. El presidente Kibaki, electo en 2002 fue reelecto en 2007 en medio de fuertes acusaciones de fraude, por un 47 %, frente a un 44 % de su contendor Odinga. Se desató una crisis que enfrentó al Presidente apoyado por la etnia Kikuyo, con la etnia Lou, a la que pertenecía Odinga y le respaldaba. Quedaron 1.500 muertos y medio millón de desplazados. La ONU se preocupó del caso, su ex Secretario Kofi Annan fue aceptado por las partes como mediador, acordando un gobierno de coalición. Human Rights Watch saludó el logro como “un modelo de acción diplomática bajo el principio de la Responsabilidad de Proteger”.

Figura 4. Mapa de Kenia.

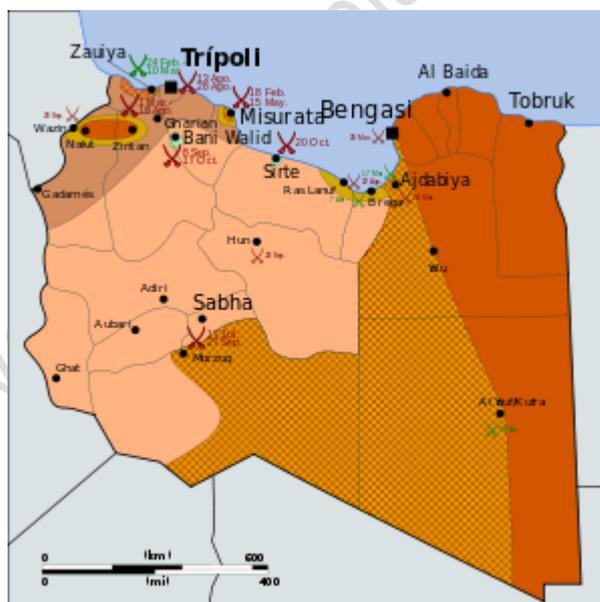


**d.- Libia.** Fue el primer caso en que el Consejo de Seguridad autorizó el uso de la fuerza militar citando la Responsabilidad de Proteger. En este país, como repique de la primavera árabe del 2011 (ver H.Arbut-Vignali 2011 y 2013), se iniciaron manifestaciones pacíficas que fueron repelidas violentamente y con saña por el jefe de Estado, Gadafi, y su ejército. Se generaron enfrentamientos que se transformaron en guerra civil abierta. Gadafi recurrió contra su pueblo a mercenarios, artillería, tanques, bombardeos en masa; finalmente Gadafi murió en combate y se creó un gobierno provisional rebelde. Pero el Estado estaba desestructurado: miles de muertos y desplazados, destrucción casi total de las ciudades, colapso de la economía, crisis humanitaria, caos político, masacre de civiles. Se abre una profunda crisis política que persiste hasta la actualidad: primero se abrió una guerra interna entre 2014-15, y después hubo dos gobiernos

enfrentados y a la presencia de terroristas (ver H.Arbuét-Vignali 2011/1 y 2011/2 Numeral 6 e).

Ante esta grave situación, el Consejo de Seguridad dictó la Resolución 1970/11, “Recordando la responsabilidad de las autoridades libias de proteger a su población”; “Reafirmando su firme compromiso con la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la unidad nacional de ..... Libia”; “Teniendo en cuenta que.....le incumbe la responsabilidad primordial de mantener la paz y seguridad internacionales”; y “Actuando en el marco del Capítulo VII° de la Carta...”, decide varias medidas coercitivas. Más adelante, sobre los mismos fundamentos adoptó la Resolución 1973/11 por la cual autoriza el uso de la fuerza armada para proteger a los civiles y a las zonas pobladas por civiles bajo amenaza de ataque de la Jamahiriya Libia comandada por Gadafi <sup>20</sup>.

Figura 5. Mapa de Libia.



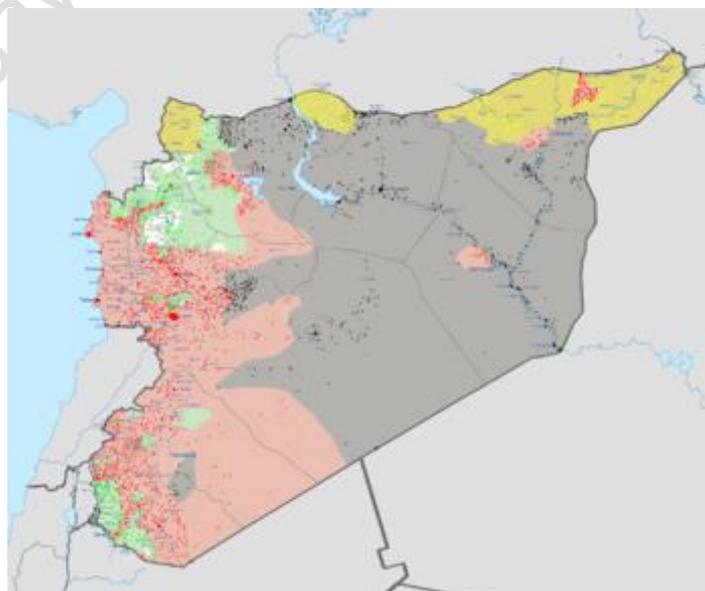
**e. Siria.** En este caso no funcionó la idea de Responsabilidad de Proteger. Los problemas en Siria comenzaron con el abrir de la primavera árabe en enero 2011

<sup>20</sup> Posteriormente se adoptarán otras Resoluciones sobre el asunto: 2009, 2016, 2017 y 2040. De los años 2014 en adelante, también se han adoptado otras resoluciones, pero estas referidas a la situación de guerra civil, acciones terroristas, amenaza del Estado Islámico y peligro de desestructurar el Estado; así mismo se gestionó algún pronunciamiento para poder actuar frente a las mafias de tránsito clandestino de personas, especialmente subsaharianas, hacia Europa.

(ver H.Arbueth-Vignali 2013/1 y 2014). Manifestaciones pacíficas de la población fueron brutalmente reprimidas por el gobierno del Presidente El Asad, y generaron una rebelión, que se concretó en una guerra civil donde se enfrentaron en forma confusa, el gobierno sirio, diversos grupos de rebeldes de diferentes ideologías, muchos y distintos grupos terroristas sirios y extranjeros, potencias mundiales y regionales, otros países y en junio de 2014 se sumó con protagonismo el Estado Islámico. El Asad usó en esta guerra contra rebeldes y civiles, todas las formas de represión y, además, armas químicas prohibidas, bombas barril y otras crueldades. La contienda lleva 200.000 muertos, 3 millones de refugiados e infinidad de desplazados; la mayoría de las ciudades están destruidas.

Actualmente, 2018, El Asad ha fortalecido su mando, Rusia ha afirmado su prestigio en Cercano y Medio Oriente en detrimento de EE.UU. y el Califato Islámico ha sido barrido, aunque mantiene focos de resistencia y actividad terrorista. Ante todo esto la comunidad internacional poco ha hecho. Mientras transcurrió el conflicto originario, por un lado las indecisiones del Presidente Obama y su impericia al dejarse envolver por una hábil jugada diplomática rusa y por otro lado el bloqueo de la acción del Consejo de Seguridad en base a la Responsabilidad de Proteger por el veto de China y de Rusia, impidieron frenar el caos. Tampoco la comunidad actuó durante la última fase del conflicto, que no está totalmente terminado y puede reavivarse.

Figura 6. Situación militar en Siria en 2014.



**f. Costa de Marfil.** En el 2010 irregularidades en la elección presidencial generaron un duro enfrentamiento. El presidente Gbagbo iba por la reelección y en primera vuelta le gana a Ouattara por 38 a 32 %; en la segunda vuelta la Comisión Electoral Independiente da por vencedor a este por el 54 %, pero el Consejo Constitucional anula esta segunda vuelta y designa a Gbagbo apoyado por el ejército. Se abre una guerra civil con excesos de ambas partes, pero especialmente muy graves de parte del bando de Gbagbo, quién terminará enjuiciado por la Corte Penal Internacional (ver H. Arbuet-Vignali 2011/3 y 2011/4).

El 30 de marzo 2011 el Consejo de Seguridad dicta la Resolución 1975 en la cual “Reafirmando que es responsabilidad de Costa de Marfil promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales...”; “Habiendo determinado que la situación.....sigue constituyendo una amenaza para la paz y seguridad internacionales.”; reafirmando la independencia, integridad territorial y unidad de Costa de Marfil; y “Actuando en el marco del Capítulo VII° de la Carta”; condena las graves violaciones de los derechos humanos de los seguidores de Gbagbo y Ouattara, respalda la elección de este y autoriza a la Operación de NN.UU. en Costa de Marfil (ONUCI) a tomar todas las acciones necesarias para proteger al pueblo.

Figura 7. Costa de Marfil. Mapa de la ofensiva de Ouattara de marzo 2011.



**g. Yemen.** También como repercusión de la primavera árabe, en Yemen se producen protestas que son fuertemente reprimidas, se abren enfrentamientos en los que el gobierno reprime duramente, cae el Presidente El Saleh, se abre una guerra civil y todo se complica por la presencia de Al Qaeda y sus atentados terroristas (ver H.Arbut-Vignali, 2011/2). El 21 de octubre de 2011 el Consejo de Seguridad dicta la Resolución 2014 en la cual “Reiterando el firme compromiso con la unidad, la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Yemen...”, “Expresando seria preocupación por el empeoramiento de la situación...el aumento de desplazados y refugiados... la amenaza de Al Qaeda...”, Recordando la responsabilidad primordial que tiene el gobierno de Yemen de proteger a su población... y “Teniendo presente su responsabilidad primordial de mantener la paz y seguridad internacionales...”, Condena las continuas violaciones de los derechos humanos, exige a las partes abandonen la violencia y se retiren las armas y solicita al Secretario General continúe con sus buenos oficios. Desde el 2015 se reabrieron violentamente los enfrentamientos, con participación de fuerzas extranjeras, especialmente de Arabia Saudita, renunció el Presidente, siguen las acciones terroristas y toda la situación está en un equilibrio inestable.

Figura 8. Mapa de Yemen.



**h. Sudán-Sudán Sur.** En y entre estos países se han dado diversos enfrentamientos. Supra se vieron los referidos al asunto de Darfur (literal b de este Numeral) pero también se han producido otros, por razones internas entre grupos revolucionarios o entre ambos países por problemas de fronteras, generalmente motivados por intereses petroleros; también por la región de Abyei. En algunos de los múltiples casos producidos en los que actuó el Consejo de Seguridad ha hecho referencia a la Responsabilidad de Proteger. Lo hizo en la Resolución 1996 del 8 de julio de 2011, en la cual: “Reiterando el firme compromiso con la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la unidad territorial...”; “Reafirmando sus resoluciones 1674 (2006) y 1894 (2009), relativas a la protección en los conflictos armados”; “Habiendo determinado que la situación que enfrenta Sudán del Sur, sigue constituyendo una amenaza para la paz y seguridad internacionales...”; “Actuando en virtud del art. VII de la Carta...”; se adoptan una serie de medidas. Con los mismos fundamentos, dichos con palabras similares, se toma la Resolución 2003 del 29 de julio de 2011.

Fig. 9. Mapa de Sudán y Sudán Sur.

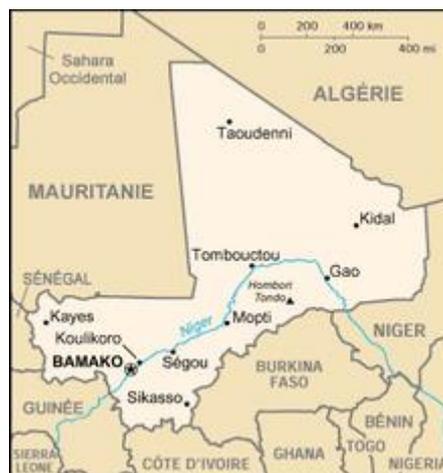


**i.- Malí.** El país está dividido en dos regiones netamente diferenciadas. En el norte, el espacio del sahel semidesértico, que abarca casi el 70 % de su territorio y está ocupado por sólo un 10 % de la población malinense de las etnias tuareg y moor, con hábitos trashumantes. En el sur, regado por los ríos Níger y Senegal, en algo más del 30 % del territorio, se alberga al 90 % de la población, integrada por etnias subsaharianas, especialmente bambaras, con hábitos rurales.

En Malí, constituido en 1960 y luego de una azarosa historia, en el 2012 se produce un levantamiento independentista en el norte del país. Ante las fallas del gobierno del presidente Touré para enfrentarlos y contenerlos un grupo de militares da un golpe de estado y lo derroca. No obstante, el movimiento rebelde del norte prosigue y en abril los tuaregs, proclaman e instituyen el Estado de Azawad. Se abre un cruento conflicto con muchas bajas y miles de desplazados. En enero de 2013 para controlar a los tuareg, fuerzas francesas con autorización de Naciones Unidas entran en acción hasta que, en julio 2014 son reemplazadas por la operación Barkhane en el Sahel (ver H.Arbuét-Vignali 2012/3).

Todo esto produjo enfrentamientos y como consecuencias de ellos existieron graves violaciones de los derechos humanos que condujeron al Consejo de Seguridad a adoptar Resoluciones vinculadas con la Responsabilidad de Proteger. La Resolución 2071 del 12 de octubre 2012, “Reiterando...la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Malí”; “Destacando que incumbe a las autoridades malienses la responsabilidad principal de...proteger a los civiles...”; tomando en cuenta las notas del gobierno de Malí a CEDEAO solicitando asistencia militar; “Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta”; se adoptan una serie de medidas. También la Resolución 2100 del 25 de abril de 2013, repite los argumentos señalados en la Resolución anteriormente citada y agrega, para fundar las decisiones que adopta: “Habiendo determinado que la situación de Malí constituye una amenaza a la paz y seguridad internacionales”.

Figura 10. Mapa de Malí.



**j.- República Centroafricana.** La República Centroafricana, país de los diamantes de sangre, sufrió entre el 2003 y el 2007 una profunda rebelión que se cerró con un acuerdo de paz que dejó abiertas heridas en la sociedad y no dio paso a una institucionalización firme, tanto en lo político como en lo religioso <sup>21</sup>. En 2013 se reabren los enfrentamientos con los ataques al gobierno de los Seleka, milicias musulmanas rebeldes, que el 22/03/13 se levantan en armas, toman Damara, Bosogoa y otras ciudades y amenazan Bangüí, la capital, que es tomada al día siguiente, huyendo el presidente Bozizé. En esta etapa se producen 600 muertos y 160.000 desplazados. Se abre una profunda crisis, aparecen otros grupos armados como la milicia cristiana anti Balaka y el Ejército de Resistencia del Señor (LRA). En la operación Sangaris, bajo auspicios de Naciones Unidas, participan 2000 soldados de fuerzas francesas, la ex metrópoli, y algunas tropas africanas; hasta que el 10 de mayo 2015 se firma el acuerdo de paz, dejando un saldo de miles de muertos y cientos de miles de desplazados. A consecuencias de estos acontecimientos el Consejo de Seguridad dictó varias Resoluciones en las que se ocupó de la Responsabilidad de Proteger, siendo el caso en que más aparece esta preocupación. Se trata de la Resoluciones 2121/13, 2127/13, 2134/14, 2149/14 y 2996/15.

<sup>21</sup> Hay un 50 % de cristianos, un 35 % de animistas y un 15 % de musulmanes.

En todas ellas con palabras similares se “Reafirma su...compromiso con la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la unidad de la República Centroafricana...”. En la todas ellas, también se recuerda que la responsabilidad primordial de proteger a la población recaen sobre: la República Centroafricana (2121 y 2196, en esta aclarando que es respecto al genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y las crímenes de lesa humanidad) o las autoridades de transición (2127, 2134 y 2149). En todas, menos en la 2149, se reconoce con similares expresiones que el conflicto armado y la crisis de la República Centroafricana, constituyen una seria amenaza para la paz y seguridad internacionales. En todas, menos en la 2013 se expresa “Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta...”. Y en las 2121 y 2149, se recuerdan las Resoluciones 1674 de 2006 y 1894 de 2009.

Figura. Mapa de la República Centro Africana.



**k.- El Califato del Estado Islámico.** La situación creada por su aparición fue una de las más graves y trágicas que hayamos conocido. Se mezcló, en un coctel de muerte y dolor infinitos, las más negativas interpretaciones ideologizadas y retrógradas de la doctrina del Islam, con el manejo posmoderno de los medios de comunicación para adoctrinar y fanatizar a las masas, con el ímpetu de poder de al Abu Bakr al-Baghdadi similar al de Napoleón, Hitler o Stalin y con la disponibilidad de financiación fácil proveniente de extorsiones o del petróleo conquistado y

vendido en el mercado negro. El fenómeno se extendió en forma importante por los territorios de Irak, Siria y con menor fuerza en otros <sup>22</sup>. Ha generado miles de muertos y heridos, ingentes cantidades de desplazados y refugiados, y los combatientes del Califato, han perpetrado los más grandes horrores e inhumanidades conocidos después de la Segunda Guerra Mundial y el principio de la Guerra Fría. Se trata de una situación en la que debería de haber funcionado la doctrina o instituto de la Responsabilidad de Proteger, cosa que no ha ocurrido y eso nos abre una gran interrogante.

Figura 12. Máxima extensión territorial del Califato.



<sup>22</sup> También dominó territorios en forma inestable y a través de grupos terroristas que se le subordinan en Afganistán, Argelia (los Soldados del Califato), Egipto (grupos en el Sinaí), Libia (en Bengasí, Derna y Sabha), Nigeria (Boko Haram), Pakistán y Yemen. Y contó con facciones aliadas en Gaza, Jordania, Líbano, las Repúblicas de la Federación Rusa de Chechenia y Daguestán y en Filipinas. Actualmente mantiene poder territorial en algunos, muy pocos, espacios. Sobre el Califato ver: H.Arbut-Vignali 2014.

## **6. La Responsabilidad de Proteger en otros órganos y conclusiones respecto a todos.**

**a.- Actividad del Secretario General.** La necesidad de actualizar la idea de la Responsabilidad de Proteger se sintió desde comienzos de la década de los 90' del siglo XX, pero hasta el 2004 la Secretaria General de Naciones Unidas no asumió un papel de importancia: J.Pérez del Cuellar a principios de los 90 y Koffi Annan (1997-2006), poco se ocuparon del tema. Cuando aparece con fuerza la idea de Responsabilidad de Proteger en la Cumbre Mundial de 2005 el Secretario General de Naciones Unidas era Kofi Annan y en 2007 asume Ban Ki-moon; algunas gestiones se hicieron, pero hasta el 2009 este órgano no tiene participación activa, aunque en 2008 se designó Asesor Especial del Secretario General para la Responsabilidad de Proteger a Edward Luck, sustituido en 2013 por Jennifer Welsch.

En enero de 2009 el Secretario General escribe su primer informe sobre el tema: "Implementación de la Responsabilidad de Proteger"; presentado a la Asamblea General, se abrirá la práctica de discutirlos. A este siguieron los informes anuales de: 2010 "Alerta temprana, evaluación y la Responsabilidad de Proteger"; 2011 "El papel de los acuerdos regionales y subregionales en la implementación de la Responsabilidad de Proteger"; 2012 "Responsabilidad de Proteger: respuestas contundentes y oportunas"; 2013 "Responsabilidad de Proteger: responsabilidad del Estado y prevención; y 2014: "Asistencia Internacional y Responsabilidad de Proteger".

**b.- Actividad de la Asamblea General.** La primera vez que la Asamblea General se ocupa y debate orgánicamente el tema es en 2009, en ocasión del primer informe del Secretario General: lo dhace primero en secciones oficiosas, considerándolo luego en Sección Plenaria; y aprobando la Resolución A/RES/63/308 del 14 de septiembre 2009, por la cual: "1. Toma nota del informe del Secretario General y del...debate...de la Asamblea General sobre la Responsabilidad de Proteger..." y "2. Decide seguir examinando la Responsabilidad de Proteger". Esto última significa que el tema figurará en la agenda del orden del día de la Asamblea, en forma regular, todos los años; lo que

así viene ocurriendo, registrándose en todas esas ocasiones diálogos interactivos officiosos entre la Asamblea y el Secretario General a partir de sus respectivos informes (ver supra 6 a, párrafo 2).

**c.- Conclusiones a los Numerales 5 y 6.** Las Naciones Unidas vienen ocupándose del tema, cada vez con mayor intensidad, desde el informe del Grupo de Alto Nivel establecido por Kofi Annan en 2004, sobre las amenazas, los desafíos y el cambio. A partir de 2009 todos los años el Secretario General presentó informes, los que fueron debatidos por la Asamblea General. Las actividades del Consejo de Seguridad (supra Numeral 5) han sido las más importantes por sus repercusiones prácticas; de ella se desprenden ciertos lineamientos generales. De 16 Resoluciones que hemos tenido en cuenta supra: en 6 se recuerdan aquellas en que se recibe la Responsabilidad de Proteger; en 11 se señalan la responsabilidad primaria del gobierno o la autoridad interina; en 4 se recuerdan la responsabilidad primordial del Consejo en el mantenimiento de la paz y seguridad. Lo significativo es que en 12 casos se reafirma la soberanía, independencia e integridad territorial del Estados dónde ocurren los hechos, en 2 que estos constituyen una amenaza para la paz y seguridad internacionales y en 9 que se actúa dentro del marco del Capítulo VII de la Carta. La Responsabilidad de Proteger ¿es el fundamento jurídico de estas Resoluciones, o este se encuentra en el sistema de Seguridad Colectiva de la Carta y el nuevo instituto sólo es un argumento socio político y moral más? ¿Cuál es la naturaleza de la Responsabilidad de Proteger? ¿Cómo se vincula con otros institutos?

## **7. La obligación de proteger: naturaleza y vínculos jurídicos.**

**a.- Las carencias del Consejo de Seguridad.** Son varios los problemas que dificultan la eficacia del Consejo de Seguridad para el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales: su naturaleza política, su integración oligárquica, el instituto del veto, la extensión abusiva de su competencia, la no implementación del art. 43 de la Carta, en enfoque demasiado centrado en los problemas de los Estados y la aparición de nuevos actores que no lo son. La Responsabilidad de Proteger aparece como respuesta a esta última necesidad: los seres humanos individuales han devenido en protagonistas de las relaciones internacionales y

deben ser cuidados porque, de lo contrario, puede desestabilizarse la paz y seguridad internacionales (ver H.rbuert-Vignali 2015 y 2018 t/p).

**b.- El Principio de No Intervención.** Se trata de un instituto gestado en América. En EE.UU., desde los orígenes de la nación, su primer Presidente Jorge Washington (1789-97) y el tercero Thomas Jefferson (1801-09) sostuvieron el principio de que el país no debía intervenir en las guerras europeas y, en cambio, comerciar con todos los países. El quinto Presidente James Monroe (1817-25), en 1823, ante los amagos y preparativos de reconquista de los Estados europeos que antes habían colonizado a los nuevos países de Ibero América, manifestó que cualquier intervención de aquellos en América Latina, sería visto como una agresión a los EE.UU..

Varias décadas después, y con diferente sentido, diplomáticos latinoamericanos se apropiaron de la idea. El diplomático uruguayo-argentino, Carlos Calvo (1825-1906) sostiene que los acreedores extranjeros, deben reclamar sus deudas ante los tribunales de los países latinoamericanos y no deben recurrir a la intervención diplomática y/o armada de sus gobiernos para cobrarlas. En 1902 se sienta la Doctrina Drago cuando este ministro de relaciones exteriores argentino sostiene que la deuda pública, no puede dar lugar a intervenciones armadas para su cobro. Y en 1930, la Doctrina Estrada, ministro de relaciones exteriores de México, sienta el principio de que su país no intervendrá opinando sobre la legitimidad de gobiernos asumidos por la fuerza, limitándose a mantener o no con ellos relaciones diplomáticas. En 1948 el Principio de No Intervención será recogido por la Carta de la Organización de Estados Americanos firmada en Bogotá y se desarrollará en su marco <sup>23</sup>. En la Carta el acto de intervención se configura con el recurso a las armas o mediante cualquier otra forma de injerencia o amenaza, atentatoria de la personalidad del Estado, o de los elementos políticos, económicos y culturales que le constituyen.

---

<sup>23</sup> Artículo 19: Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen. Artículo 20: Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza.

**c. El deber de no intervención.** La Carta de Naciones Unidas, en 1945, recibe en forma tímida y ambigua el deber de no intervención al establecer entre sus Principios del art. 2, su inc. 7 que dice “Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas <sup>24</sup> a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados...”, dejando inmediatamente a salvo de este mandato a las actuaciones del Consejo de Seguridad iniciadas en base al Capítulo VII de la Carta para el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. A la inclusión de esta disposición se opuso EE.UU. y otras potencias; luego se sostuvo que sólo obligaba a la Organización; finalmente se aceptó que también alcanzaba a los Estados y prevaleció la opinión de Jiménez de Aréchaga (1980, Capítulo IV, Sección III y 2005, Tomo I, Capítulo IX, Sección V). El Maestro Jiménez de Aréchaga entiende que es intervención prohibida, no sólo la armada o la amenaza de ella, sino también cualquier otra acción ilegítima de coerción de un Estado respecto a otro; pero agrega que la palabra clave es “coerción” ya que la mera opinión de un Estado sobre la conducta de otro, una exhortación a tomar determinado camino o una denuncia ante órgano competente sobre lo irregular de su conducta, por ejemplo, no constituyen intervención en la medida en que no sea acompañado por coerción de Estado a Estado, lo que la doctrina clásica denominaba “interferencia dictatorial”. “Intervención es toda demanda perentoria a un Estado, para que desarrolle cierta conducta, acompañada de ejecución, o bajo amenaza de ejecución coercitiva en caso de incumplimiento de esa demanda”. Compartimos esta opinión.

El deber de no intervención recién es aceptado plenamente por toda la comunidad internacional en la Declaración 2524/XXV sobre los principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación de los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, del 24 de octubre de 1970, dónde se establece: “Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de ningún otro.”, comprendiendo en la prohibición la agresión armada y “...cualquier otra forma de injerencia o de amenaza atentatoria...con violación del Derecho Internacional”.

---

<sup>24</sup> Esta referencia desató una larga discusión acerca de si la obligación comprendía también a los Estados miembros, lo que en definitiva se aceptó.

**d. La “intervención humanitaria”.** Durante el amplio período de las relaciones internacionales reguladas por el llamado Derecho Internacional clásico, hasta circa 1918, no había una clara prohibición de no intervención, no obstante lo cual, en cierta forma se decía que sólo se admitía la injerencia cuando el objeto de la acción consistía en la protección de poblaciones que eran perseguidas dentro de un Estado, generalmente por el gobierno de este, por razones étnicas, religiosas, políticas o de índole similar <sup>25</sup>.

A partir del siglo XIX se comenzó a utilizar la expresión “intervención humanitaria” para indicar este tipo de acciones y otras tendientes a la protección de los nacionales radicados en el extranjero, aunque muchas veces se trató de un subterfugio con el que se querían ocultar otros propósitos de clara y pura intervención <sup>26</sup>. Desde mediados del siglo XIX, durante el siglo XX y aún en el XXI E.E.UU. fue el país que más recurrió a este ilegítimo instrumento justificando sus intervenciones en América Latina y el Caribe, especialmente en la necesidad de proteger a sus nacionales y a sus intereses <sup>27</sup>.

Actualmente se habla de intervención humanitaria para denominar las acciones emprendidas por la comunidad internacional en el territorio de un determinado

---

<sup>25</sup> H.Grocio, 1625, con antecedentes en F.Suárez, 1612, aceptan la guerra justa, lo que puede considerarse como una idea precursora de las “intervenciones humanitarias”. E.Vattel, 1758, admite como derecho de resistencia a la opresión, la revuelta del pueblo contra el gobernante injusto y en esos casos haya legítimo que otros Estados acudan en ayuda del pueblo.

<sup>26</sup> En 1830, Francia, Gran Bretaña y Rusia intervienen en Grecia, para proteger a los griegos de los maltratos del Imperio Otomano, lo que termina con la independencia griega. A lo largo del siglo XIX las potencias europeas intervienen en el Imperio Otomano, el Hombre enfermo, con el pretexto de proteger a las minorías cristianas y el fin real de debilitarlo: Creta 1866, Bosnia 1875, Bulgaria 1877 y Macedonia 1885. En 1860 Francia interviene en Siria con el pretexto de salvar a los maronitas que eran masacrados por los drusos y en realidad asientan su influencia estratégica y económico comercial en la región. En 1901, las potencias europeas, EE.UU. y Japón intervienen en China para proteger a las poblaciones cristianas y terminan debilitando a la dinastía Qing o manchú y extrayendo de ella una serie de ventajas económicas y comerciales.

<sup>27</sup> Con el pretexto de aplicar la Doctrina Monroe (1823 en adelante), en el marco de la diplomacia del dólar (1919-25), en el contexto de la autollamada política del buen vecino (1933-46), dentro del sistema de la guerra fría y la lucha anticomunista (1947-67), en el marco del Plan Cóndor (1970-82), o bajo el pretexto de la lucha contra la droga, las intervenciones militares de EE.UU. en Iberoamérica y Haití han sido centenares y constantes. Los pretextos esgrimidos para ello fueron variados: protección de sus nacionales e intereses comerciales, sus consulados, sus barcos mercantes, necesidades humanitarias, requerimientos de poner orden; y los fines reales, además del amparo de sus nacionales e intereses, consistieron en forzar acuerdos que les otorgaran ventajas, detener prófugos de la justicia estadounidense y, en especial, respaldar gobiernos locales, generalmente dictatoriales, pero alineados con EE.UU., primero contra el nazi-fascismo durante la Segunda Guerra Mundial y, después contra el comunismo soviético. Las intervenciones más importantes se realizaron frente a México en el proceso de expansión y conquista, después, en ocasión de la independencia de Cuba y la guerra con España y en Centro América y el Caribe. Hay otras menos espectaculares y poco conocidas ocurridas incluso en Uruguay y el contexto cercano.

Estado con el fin de proteger y defender a las poblaciones de violaciones graves de los derechos humanos fundamentales y garantizar la asistencia humanitaria a las víctimas de conflictos armados, cuando el gobierno territorial lo impide o es el responsable. Entendemos que con esto se hace un uso indebido de la palabra, debiendo en estos casos decirse “actuación humanitaria” Jurídicamente es una acción específicamente militar de uno o de varios Estados o de una Organización Internacional, dentro de un Estado para frenar en este las violaciones graves y masivas de los derechos humanos.

## **8. La Responsabilidad de Proteger, la no intervención y la soberanía.**

**a.- Responsabilidad de Proteger y la no intervención.** Las acciones que se concretan al amparo de la Responsabilidad de Proteger, siempre deben estar a cargo o del Estado territorial o de las naciones unidas. Si las llevaran a cabo un Estado ajeno y por su cuenta, con ello estaría consumando un acto de clara e ilegítima intervención, cualquiera fuere su intención y aunque sus propósitos fueren sanos. El reconocimiento del instituto ha configurado un avance en el camino de situar a las relaciones internacionales en el marco del estado civilizado y de paz; pero una acción como la indicada constituiría algo así como cometer un delito de justicia por su propia mano en el marco del estado civilizado y de paz de un sistema jurídico interno.

La doctrina, al tratar de explicar la Responsabilidad de Proteger, ha sostenido que el Principio de No Intervención tiene límites: el deber de de los Estados de respetar internamente la dignidad y los derechos básicos de sus poblaciones y que, cuando se producen graves violaciones a los derechos humanos se puede dejar de lado el Principio optando por el amparo. No compartimos esta opinión. Ningún Estado puede, por su cuenta, abrogarse esta facultad-responsabilidad. Estas acciones sólo pueden llevarse a cabo legítimamente por el Estado territorial o, en subsidio, por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o por encargo y bajo la responsabilidad de este. También se diferencia esta situación de las “intervenciones humanitarias”, afirmando que no hay Principio que permita proteger a los actores de crímenes de lesa humanidad. Pero no se avanza más allá y no se proporcionan los fundamentos últimos que den razón a estas afirmaciones.

Nosotros entendemos que la obligación de proteger es puesta en primer lugar bajo la responsabilidad del Estado que ejerce la soberanía y gobierna el territorio donde se producen los hechos, por lo cual, si este actúa, no hay intervención de ningún tercer Estado. Además, dicha obligación sólo se pone bajo la responsabilidad de la comunidad internacional complementariamente, cuando el Estado territorial es el responsable de las violaciones o, simplemente omite proteger a sus súbditos, En estos casos la comunidad internacional, además, debe actuar dentro de marco del Capítulo VII de la Carta, con lo cual no se desarrollan acciones persiguiendo fines de política nacional, sino cumpliendo una función pública internacional, en representación de la comunidad y procurando evitar un quiebre a la paz y seguridad internacionales (ver Resolución A/RES/60/1, sura Numeral 4 g). Tampoco en este caso hay intervención de ningún tipo, ni siquiera la pretendida “humanitaria” y para evitar confusiones debe evitarse el empleo de este término y usarse el verbo “actuar”. El instituto/doctrina, en cambio, no avala la posibilidad de que un Estado ajeno se erija por su cuenta en protector y intervenga; con esta actitud se configura una violación al Derecho Internacional. Sólo podría admitirse como legítima la actuación de un Estado o de un grupo de ellos, si previamente hubieran sido encargados de actuar por el Consejo de Seguridad, procediendo en su nombre <sup>28</sup>.

**b.- Obligación de proteger y soberanía. i.- Planteo de la situación.** En la época del pre Derecho Internacional clásico y también del intermedio, hasta la Carta de las Naciones Unidas, el tratamiento de los nacionales era un asunto de la estricta jurisdicción interna y, con la idea política de soberanía que se aplicaba por entonces para el encausamiento de las relaciones internacionales, lo que actualmente constituye un acto propio de la Responsabilidad de Proteger los derechos humanos de las poblaciones, era considerada una intervención absolutamente prohibida en los asuntos de la exclusiva jurisdicción interna de los Estados, admitiéndose sólo con algunas discusiones en los casos en que se trataran de proteger los derechos de extranjeros por el Estado de su nacionalidad. Esta situación se modifica radicalmente con la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas que, con el Principio de la Igualdad Soberana de los Estados, adopta un

---

<sup>28</sup> Se ha pretendido, pero creemos que no es procedente, la expresa legitimación posterior del Consejo de Seguridad; mucho menos la suposición de una autorización tácita por silencio o falta de acción.

concepto jurídico de soberanía, soberanía bajo Derecho Internacional, consagrando a partir de este nuevo Principio un sistema de reglas internacionales de naturaleza jurídica, el Derecho Internacional Público (ver supra H.Arbut-Vignali, 2018 t/p Capítulos III, IV Sección III Numeral 3, V Sección IV y X Sección V Numeral 2). En el nuevo marco que se establece para las relaciones internacionales, a las que se insertan en un estado civilizado aunque de guerra, la protección de los derechos humanos fundamentales en cualquier lugar y la persecución de ciertos crímenes, especialmente los aberrantes, pasan a ser una preocupación de la comunidad internacional y para actualizarla, se legitima que sus órganos actúen siguiendo las reglas vigoras, aún dentro de la jurisdicción interna de los Estados. En estos casos sólo se está cumpliendo con un deber legítimamente establecido.

**ii.- Las posiciones doctrinarias.** La doctrina al posicionarse sobre el punto ha sostenido distintas opiniones. Pudo sostenerse, aunque fuera del campo político no conocemos a nadie que lo haya hecho, que el instituto vulnera el atributo de la soberanía y por ello no puede aplicarse; esta opinión recurriría a una idea política de soberanía (ver supra Capítulo I, llamadas 7, 10) que funcionó en las relaciones internacionales nutriendo al pre Derecho Internacional de naturaleza socio-política que funcionó hasta la Carta de Naciones Unidas, pero que es actualmente, desde mediados del siglo XX, es totalmente dejada de lado por peligrosa, retrógrada y divorciada de la realidad de las relaciones internacionales. En la posmodernidad se ha abierto paso la idea jurídica de soberanía, la que es la consecuencia de recibir el Principio de la Igualdad Soberana de los Estados y la hace totalmente compatible con el instituto/doctrina de la Responsabilidad de Proteger.

Algún pequeño sector de la doctrina sostuvo que el instituto podía ser considerado como una actualización pos moderna que restablecía la doctrina del “bellum iustum”, pero esta nos parece una posición solo adecuada si se mantuviera para el derecho una idea política de soberanía, lo que no ocurre desde que la Carta adoptó en ella la idea de Igualdad Soberana de los Estados y, en consecuencia, la idea jurídica de soberanía bajo el Derecho Internacional.

La gran mayoría de la doctrina que se ocupa del tema <sup>29</sup>, siguiendo las tendencias marcada por el CIISE 2001, los informes de los Secretarios Generales, las Resoluciones de la Asamblea General y la práctica del Consejo de Seguridad, sostiene la existencia de una nueva idea de soberanía estatal, aunque algunos expresamente rechacen esta posibilidad. Este grupo respalda la propuesta del Asesor Legal de la Secretaría General para Prevenir el Genocidio, Edward Luck, quién pensaba que la soberanía ya no significa únicamente la protección a los Estados frente a las injerencias extranjeras, ser la mayor garantía de su independencia e integridad, sino que contiene, además, una carga de responsabilidad que obliga a los Estados a responder por el bienestar de sus poblaciones protegiéndolas de ciertas acciones delictivas, cueles y degradantes. Se establece un “nuevo” significado de la soberanía estatal como responsabilidad o como función: la soberanía, no sólo da al Estado el derecho de controlar en exclusividad sus asuntos internos, no sólo evita la injerencia de los demás en ellos, sino que, además le impone la responsabilidad primordial de proteger a sus poblaciones dentro de sus fronteras. Esta sería una especie de carga condicionante de sus derechos.

R.Pezzano, 2012, habla de una soberanía responsable, que se origina en las ideas de F.Deng, 1996, al sostener que la soberanía es también la responsabilidad de realizar las tareas que se esperan sean asumidas por un gobierno efectivo. Esta posición es acompañada por buena parte de la doctrina, pero a ella suelen oponerse algunos Estados, especialmente las potencias importantes que no desean ver disminuidas las fuerzas de su vieja idea de soberanía política. Sus gobernantes con egolatría y egoísmo pretenden ignorar que en el marco de la nueva civilización, solo cabe aceptar el estado civilizado, bajo reglas y autoridades, porque el caótico estado de naturaleza o de semi naturaleza, puede desatar una guerra que termine con todo.

En la línea de los dos autores citados supra, otros sostienen que la soberanía es un concepto histórico y contingente <sup>30</sup>; que la idea de soberanía absoluta creada por

---

<sup>29</sup> F.Deng, 1996, C.Añaños, 2010, L.Pezzano, 2012, E.Méndez del Valle, 2016.

<sup>30</sup> Posición que refleja la nuestra, porque la soberanía es una idea-fuerza histórica, que no siempre existió y, por ello, puede desaparecer; siendo así, también admite modificaciones y, como resulta notorio, encierra diferentes significados en las distintas ciencias sociales a las que sirve (ver upr llamada 10).

algunos teóricos <sup>31</sup> nunca existió fuera de sus mentes privilegiadas y que, en la realidad histórica internacional, jamás funcionó, con las fuerzas capaces de desencadenar aplicando la totalidad del concepto, en el ámbito de un tiempo-espacio históricamente considerable, como un instrumento operante para que convivieran los Estados en sociedad, aunque algunos gobernantes la pretendieron concretar <sup>32</sup>. Estos autores concluyen en que cada Estado debe respetar la soberanía de los demás, que el Derecho Internacional pone límites a la soberanía; que para explicar la Responsabilidad de Proteger no es necesario redefinir la soberanía; que aquella es compatible con la soberanía tomada como atributo o cualidad del Estado en cuanto forma de organización política y sujeto del Derecho Internacional. C.Añños, 2010, sostiene que la Responsabilidad de Proteger responde a un nuevo concepto de soberanía entendida como responsabilidad en el doble sentido de respetar la soberanía de los demás Estados y de respetar los derechos humanos de su propia población; posición en la que coincide E.Menéndez, 2016, agregando que el deber de protección no disminuye la soberanía.

**iii. Lo que resulta de las actividades de la Organización.** La Organización, está inserta en un sistema jurídico de coordinación puro, el que da mucha injerencia a sus Estados-protagonistas y no puede actuar desconociendo su Principio paradigmático, el de la Igualdad Soberana de los Estados. Los órganos de la Organización, los representantes de los Estados dentro de estos y los altos funcionarios de aquella, han vinculado a la Responsabilidad de Proteger con la soberanía, pero para hacerlo han recurrido al procedimiento de “la ambigüedad constructiva”, es decir los concretan con palabras y giros elusivos, dejando a la práctica de los Estados la concreción de los significados, y esto con el propósito de extender las obligaciones del sistema, pero con muchas precauciones para no chocar de frente con las posiciones tradicionales. En este tema se han posicionado en forma similar a lo que han hecho con las Declaraciones de los Derechos Humanos, con la Convención de Genocidio, con las de Ginebra de 1949, con la normativa vinculada a la Corte Penal Internacional y con otros casos similares: sus

---

<sup>31</sup> En cierto momento la de J.Bodin, 1576, indudablemente las de T.Hobbes, 1651, B.Spinoza, 1670, J.J.Rousseus, 1762 y G.Hegel, 1820.

<sup>32</sup> Napoleón, Hitler, parciamente Stalin, aunque sus aspiraciones pronto sucumbieron después de pagarse altos costos.

autoridades y funcionarios bien intencionados, intentan y en ocasiones logran, establecer obligaciones para los Estados; pero estos procuran y muchas veces consiguen, impedir la eficacia de esos institutos permitiendo interpretaciones limitantes, que se les impiden evolucionar hacia sistemas con bases políticas y jurídicas más comprometedoras que las de Derecho Internacional Público y que reciban el Principio de la Supranacionalidad; aunque en ocasiones se logra. Con esto los Estados consiguen que los institutos no les impidan actuar con suficiente discrecionalidad, ni limiten efectivamente el ámbito de sus decisiones.

Las realidades de la posmodernidad empujan a la sociedad internacional hacia un estado civilizado y de paz. La mejor concreción de ello se lograría ingresando en un sistema jurídico con estructuras de subordinación, como los sistemas internos, al que, en algún momento, se llegará, pero que es una idea que actualmente enfrenta muchas resistencias para concretarse y, entre tanto, se siguen estas prácticas. Experiencias como la de la Responsabilidad de Proteger resultan muy positivas porque mantienen el equilibrio entre los viejos intereses históricos de los Estados soberanos que desearían, si fuera posible, mantenerse en el proceloso estado de naturaleza y la realidad posmoderna, que con las ventajas y peligros que crea empuja a los Estados a un estado civilizado y de paz; el método sólo lentamente hace efectiva la idea de soberanía bajo derecho pero atiende las razones de la nueva situación y avanza en sus logros.

En relación al instituto en estudio, la normativa y la práctica de la Organización han dejado en claro que el Estado es el primer responsable y está obligado a proteger a sus poblaciones; que si no lo hace será sancionado; y que, entonces, además, la protección quedará a cargo de la sociedad internacional organizada en Naciones Unidas; la cual como “última ratio” podrá usar la fuerza armada, pero en el marco político del Consejo de Seguridad, actuando dentro del margen legal del Capítulo VII de la Carta <sup>33</sup>. También existe coincidencia generalizada en que antes de recurrir a la fuerza armada debe tenerse en cuenta la gravedad de la amenaza, comprobada la existencia de un propósito correcto, tratarse del último recurso, respetarse la proporcionalidad de la respuesta y hacer previamente un balance de las consecuencias de las medidas. El acuerdo en esto también es amplio y

---

<sup>33</sup> Ocasionalmente se ha discutido qué debería ‘asar si la actuación del Consejo de Seguridad fuera insoslayable y resultara impedida por el veto, preguntándose si, en esos casos, no se podría prescindir de ella y admitir la actuación directa de los Estados.

generalizado; tanto como el silencio para explicar cuáles son las razones profundas para qué esto en una hermenéutica que respete la lógica jurídica, deba ser así y armonice con todo el resto del sistema.

**c.- Nuestra posición respecto a estos puntos.** Es simple, debería ser clara y se enmarca dentro de las ideas básicas y estructurales que sostenemos en el marco de la teoría general de la Escuela de Derecho Internacional de Montevideo que hemos desarrollado (ver H.Arbuét-Vignali 2018 t/p).

El Instituto/doctrina de la Responsabilidad de Proteger responde a un desarrollo lógico del Derecho Internacional ante los desafíos y necesidades de la posmodernidad que lo impulsa hacia un estado civilizado, aunque no sea de paz. Su aparición, por el momento en que ocurre, no se enfrenta con el atributo de la soberanía tal y como el es concebido y funciona en el sistema jurídico de la Carta de las Naciones Unidas que regula las relaciones Internacionales. Por el contrario es una consecuencia lógico-racional de él <sup>34</sup>; el atributo de la soberanía jurídica y la Responsabilidad de Proteger, resultan totalmente compatibles entre sí por ser esta una consecuencia de aquella.

Tampoco se trata de “una nueva idea de soberanía”, ni de una naciente evolución de la misma, aunque algo de esto pueda encontrarse. Por lo dicho anteriormente resulta correcto sostener que la idea de soberanía es histórica y evolutiva; además han convivido, a lo largo del tiempo y en un mismo momento, diferentes contenidos para la idea de soberanía, según la ciencia social que requiriese de sus apoyos y los aplicase. Lo que ha ocurrido es que en el marco de las relaciones internacionales, la idea política de soberanía, a la que se recurrió básicamente en ellas hasta mediados del siglo XX y que rechazaba a los institutos de este tipo, ha sido reemplazada por la idea jurídica de soberanía que no sólo es compatible con el nuevo instituto/doctrina, sino que este es su consecuencia.

La Responsabilidad de Proteger se funda en el atributo jurídico de la soberanía que pauta y regula las relaciones internacionales posmodernas a partir de la Carta de Naciones Unidas que creó un sistema jurídico para regular las relaciones entre

---

<sup>34</sup> Podrían haberse dado desajustes en el sistema anterior pre jurídico, que aceptaba una concepción política de la soberanía como capacidad absoluta, excluyente de todo límite. Pero esa idea está superada a partir de la aceptación del Principio de la Igualdad Soberana de los Estados, que armoniza la existencia de Estados soberanos con su sometimiento a un sistema jurídico que ellos mismos aceptan con sus voluntades soberanas y cooperan para construir.

Estados soberanos subordinándolos a derecho, sin afectar por ello su atributo paradigmático.

Este cambio es el que requiere una explicación. Es un hecho fácil de comprobar que toda la doctrina ha sostenido y la práctica ha presupuesto la existencia de un sistema de normas destinado a regular las relaciones internacionales a las que, al menos desde Westfalia se ha llamado Derecho Internacional Público y que, en consecuencias, se suponía tenía naturaleza jurídica. Pero esto no era tan así. Existe y existieron desde siempre conjuntos de reglas para regular las relaciones entre Centros de Poder independientes primero y después las relaciones internacionales entre Estados, pero la naturaleza de ellas, primero fue religiosa, después político religiosa, más adelante socio política o socio política y moral y, a partir de Westfalia y hasta la Carta de Naciones Unidas de naturaleza político social con inclinaciones a lo jurídico. Durante todo ese largo tránsito desde la prehistoria al siglo XX, primero la voluntad determinante de los Centros de Poder era total y sólo limitada por la realidad de los hechos o por las eventuales conveniencias y, más tarde, la voluntad soberana de los Estados era absoluta, sin restricciones que no fueran las mismas señaladas para el período anterior. Paralelamente se hicieron esfuerzos religiosos y morales, también socio políticos, para establecer algunos límites que, con el correr del tiempo fueron pensándose que podrían ser jurídicos.

Pero las reglas no eran jurídicas porque no tenían el carácter coercitivo propio de estas normas, no podían imponerse objetivamente a los sujetos; porque la sociedad internacional no contaba con autoridades instituidas en estructuras reconocidas y aceptada por todos los Estados a nivel mundial, aunque ellas tuvieran defectos y carencias, como ocurre actualmente, pero existentes, reconocidas, aceptadas y con un determinado margen importante de poder de imposición que respalde sus decisiones y les permita ejecutarlas forzosamente.

Antes de mediados del siglo XX, quizá sus décadas del 70' al 80', las reglas internacionales, más allá de la ecuación de poder de los propios Estados y sus eventuales alianzas, estos jamás dispusieron de otro respaldo que les permitiera ser impuestas en el marco de una estructura coherente; y ello no ocurrió ni aún en el sistema de la Sociedad de las Naciones.

Recién después de 1945, con la Carta de Naciones Unidas y la entrada en funcionamiento de su sistema y con más legitimidad, después de las décadas de la descolonización de los 70' a los 80', se dispuso de autoridades legítimas, aceptadas por todos, con jurisdicción universal y cada vez más capaces de hacer cumplir las reglas. Anteriormente las reglas no eran coercibles, ni aún con las limitaciones fácticas que enfrenta toda coercibilidad, y por lo tanto no eran jurídicas.

Con la Carta de las Naciones Unidas los Estados soberanos crean un sistema jurídico que basan en el Principio de la Igualdad Soberana de los Estados, lo que les permite ser soberanos sometiéndose al derecho, soberanía bajo derecho. El sistema jurídico que se crea posee principios y estructuras muy permisivas para sus sujetos protagonistas. Por ello, aún en la actualidad, con todos los avances aportados por el sistema jurídico internacional mundial, aunque este obliga a los Estados sometiéndolos a sus mandatos y puede castigarlos si no los cumple, al tratarse de un sistema jurídico de coordinación puro, este continúa siendo sumamente permisivo; con sujetos-protagonistas que tienen mucho peso en el manejo en todo su desarrollo.

El Derecho Internacional Público, con estructuras puras de coordinación, es un sistema donde sus sujetos, especialmente los Estados, son los que directamente crean sus reglas <sup>35</sup> y vigilan directamente el cumplimiento de las mismas <sup>36</sup>, donde el someter a juicio las controversias es sólo un compromiso voluntario <sup>37</sup>, donde la decisión de los tribunales, si tiene que ejecutarse forzosamente por la autoridad internacional, salvo en casos especialísimos en que sea amenazada la paz y seguridad internacionales, encuentra en las fronteras una valla insalvable por el amparo de la supremacía territorial y el ámbito de la jurisdicción interna <sup>38</sup> y donde el castigo de los infractores, las decisiones en materia de mantenimiento de

---

<sup>35</sup> Y por eso pueden: no hacerlas; o hacerlas muy poco severas; o al imponer en ellas obligaciones usar una terminología ambigua, susceptible de diversas interpretaciones válidas, de la que pueden extraerse conclusiones constructivas que permitan el desarrollo progresivo del sistema hacia una sociedad en estado civilizado y de paz, pero también conclusiones oscurantistas y que permitan a los Estados eludir sus obligaciones para con la comunidad internacional y también para con sus pueblos.

<sup>36</sup> Lo que les permite señalar a los infractores o no hacerlo o acusar a sus rivales y amparar a sus aliados.

<sup>37</sup> Por lo cual, si no aceptan la jurisdicción, pueden quedar libres de actuar en la medida en que estén respaldados por sus fuerzas y las de sus aliados. Los únicos asuntos sometidos al juicio de un tercero imparcial cuya decisión es obligatoria de ejecutar, sólo se abren si el sujeto lo quiere.

<sup>38</sup> Por lo cual, en ocasiones, el mandato judicial puede ser, en la realidad, sólo ser una satisfacción moral.

paz y seguridad y las que atañen a la Responsabilidad de Proteger las toman, cumpliendo ciertos requisitos, los propios sujetos, los Estados <sup>39</sup>.

En conclusión la Responsabilidad de Proteger no afecta la soberanía de los Estados porque es un producto de su voluntad soberana establecida como norma jurídica, que limita el ejercicio de una soberanía absoluta, que nadie desea porque es muy peligrosa y agotadora. Pero se trata de un instituto establecido dentro de y regulado por un sistema jurídico con estructuras puras de coordinación, legitimado por la recepción del Principio de la Igualdad Soberana de los Estados, que consagra y respeta el atributo de la soberanía bajo el Derecho Internacional Público y, por ello: tanto la Igualdad Soberana como la Responsabilidad de Proteger son normas jurídicas de igual jerarquía que deben aplicarse.

En un sistema puro de coordinación, como lo es el Derecho Internacional Público, donde se insertan esas reglas, la prevalencia de una u otra, en los hechos, es extraordinariamente difícil, que la determine una autoridad imparcial, objetiva y que disponga de respaldo de poder suficiente para hacer ejecutar sus decisiones, sino que la determinarán sus propios sujetos. Las fallas y falencias no son de las normas tal como están redactadas, ellas son claras. Las debilidades las aportan las características propias del sistema jurídico de coordinación en que se insertan. Para superarlas, no es suficiente crear teorías dentro del sistema, como, por ejemplo, la teoría de la soberanía como responsabilidad, sino que estos institutos deberán ubicarse en sistemas con otras estructuras, sistemas mixto, comunitarios o de subordinación. Para que esto suceda se requiere la concurrencia de la voluntad política de los gobernantes que conducen a los Estados, que estos se manifiesten en el sentido de transitar hacia un estado civilizado pleno y de paz, dejando de lado las ideas de soberanía absoluta que aún subsisten en algunas mentes y que solo funciona en un estado de naturaleza y guerra. No hay muchos signos de que la voluntad de los gobernantes que deciden por los Estados vaya en ese sentido. Pero la tendencia de los hechos internacionales indica que más pronto que tarde los Estados y sus gobernantes empujados por sus pueblos, deberán optar entre el estado civilizado o el caos de una guerra nuclear, la contaminación u otras amenazas no menores. Entonces se aceptarán otras

---

<sup>39</sup> Con lo cual se abre a estos la legitimación jurídica de una discrecionalidad tal que les permite amparar sus conveniencias.

estructuras jurídicas internacionales e institutos/doctrina como la Responsabilidad de Proteger funcionarán satisfactoriamente.

Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales

## Obras citadas.

1. AÑÑOS MEZA, Cecilia (2010): Responsabilidad de proteger en Naciones Unidas y la doctrina de la R2P. En anuario Mexicano de Derecho Internacional, volumen 10, México, enero 2010.
2. ARBUET-VIGNALI, Heber (2005): El fundamento del Derecho Internacional Público. En E.Jiménez; H.Arquet y R,Puceiro, 2005,08, 12 y 15, Tomo I, Capítulo II, Sección II, Numeral 2.
3. ARBUET-VIGNALI, Heber (2009): El Estado posmoderno y la soberanía. Ed. Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales (CURI). Estudio 01/09, del 17 de julio del 2009. Ed. digital: <http://curi.org.uy/archivos/estudiocurio1del09arquet.pdf>
4. ARBUET-VIGNALI, Heber (2011): ¿Reme(s)ón islámca, o algo más? Ed. Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales (CURI). Estudio 01/11 del 14 de febrero 2011. Ed. digital <http://curi.org.uy/archivos/estudiocurio1del11arquet.pdf>
5. ARBUET-VIGNALI, Heber (2011/1): Tercera ola: Libia. Revolución sangrienta....¿y fecundante? Ed. Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales (CURI). Estudio 06/11, 24 octubre de 2011. Ed.digital <http://curi.org.uy/archivos/estudiocurio6del11arquet.pdf>
6. ARBUET-VIGNALI, Heber (2011/2): Cuarta ola: Yemen. Un proceso de menor perfil y el después de los demás (22) países. Ed. Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales (CURI). Estudio 09/11 del 19 de diciembre de 2011. Ed. digital: <http://curi.org.uy/archivos/estudiocurio9del11arquet.pdf>
7. ARBUET-VIGNALI, Heber (2011/3): Segunda ola: más que reme(s)ón y sangrienta. Costa de Marfil. Ed. Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales (CURI). Estudio N° 03/11 del 4 de mayo de 2011. <http://curi.org.uy/archivos/estudiocurio3del11arquet.pdf>
8. ARBUET-VIGNALI, Heber (2011/4): Consta de Marfil: una realidad por fuera de la primavera árabe. En Revista Naval. Año XXIII, N° 67, Montevideo 2011.
9. ARBUET-VIGNALI, Heber (2011/5): El nuevo frente: los desafíos y amenazas de la posmodernidad en las relaciones internacionales. Carencias

jurídico-institucionales. En Revista Estrategia. Tercer época N° 3. Ed. Centro de Altos Estudios Nacionales (CALEN). Montevideo 2011.

10. ARBUET-VIGNALI, Heber (2012): ¿Intervenir o actuar? El uso lícito de la fuerza armada. Ed. Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales (CURI). Estudio 01/12 del 17 de abril de 2012. Ed. digital: <http://curi.org.uy/archivos/estudiocurio1del12arbuuet.pdf>

11. ARBUET-VIGNALI, Heber (2012/1); La importancia de la piratería en el sistema jurídico internacional posmoderno. En Revista Naval, Año XXIV, N° 70, Montevideo agosto 2012.

12. ARBUET-VIGNALI Heber (2012/2): El papel del Derecho Internacional Público en el siglo XXI. Ed. Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales (CURI). Análisis 03/12 del 23 de abril de 2012. Ed. digital: <http://curi.org.uy/archivos/análisiscurio3del12arbuuet.pdf>

13. ARBUET VIGNALI, Heber (2012/3): Azawad: ¿Un nuevo Estado? Ed. Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales (CURI). Estudio 03/12 del 4 de julio 2012. Ed. digital: <http://curi.org.uy/archivos/estudiocurio3del12arbuuet.pdf>

14. ARBUET-VIGNALI, Heber (2013): La primavera árabe: dos años y tres meses después. Ed. Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales (CURI). Estudio 01/13 del 1° de abril de 2013. Ed. Digital: <http://curi.org.uy/archivos/estudiocurio1del13arbuuet.pdf>

15. ARBUET-VIGNALI, Heber (2013/1): Balance sin perspectivas: la muerte de los sirios no impacta en los líderes. Ed. Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales (CURI). Estudio 10/13, 23 de diciembre de 2013. <http://curi.org.uy/archivos/estudiocurio10del13arbuuet.pdf>

16. ARBUET-VIGNALI, Heber (2013/2): Necesidad de un nuevo sistema jurídico para las relaciones internacionales posmodernas. Edición Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales (CURI). Estudio N° 02/13 del 12 de junio de 2013. Edición digital <http://curi.org.uy/archivos/estudiocurio2del13arbuuet.pdf>

17. ARBUET-VIGNALI, Heber (2014): El Califato Islámico, rémora para, o producto de, la posmodernidad. Ed. Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales (CURI). Estudio 05/14. Ed. digital: <http://curi.org.uy/archivos/estudiocurio5del14arbuuet.pdf>

18. ARBUET-VIGNALI, Heber (2015 t/p): Teoría jurídica de la soberanía. Y su influencia sobre la doctrina del Estado posmoderno. Inédito, en trámite de publicación, El Pinar 2015.
19. ARBUET-VIGNALI, Heber (2018 t/p): Teoría general del Derecho Internacional Público. Para la posmodernidad y desde la Escuela de Montevideo. Inédito, en trámite de publicación. El Pinar 2018.
20. DENG, Francis y otros (1996): Sovereignty as responsibility, En Brookings Institution Press, 1996.
21. GROCIO, Hugo (1625): El derecho de la guerra y de la paz. Ed. Reus S.A., Madrid 1925.
22. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, Eduardo (1980): El derecho Internacional contemporáneo. Ed. Tecnos. Madrid 1980.
23. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, Eduardo (2005): Los principios generales del derecho internacional que rigen las relaciones internacionales. En E.Jiménez, H.Arbut y R.Puceiro, tomo I, Capítulo IX, Secciones III a V.
24. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, Eduardo, ARBUET-VIGNALI, Heber, PUCEIRO RIPOLL, Roberto (2005, 08,12 y 15): Derecho Internacional Público. Principios. Normas. Estructuras. 4 volúmenes. Ed. Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo 2005,08.12 y 15.
25. LAUTERPACHT, Harold (1933): The function of law in the international community. /Oxford, 1933.
26. LOCKE, John (1690): Segundo tratado sobre el gobierno civil. Ed. Atalaya/Tecnos, Barcelona 1994 o Alianza, Madrid 1990.
27. MENÉNDEZ DEL VALLE, Emiliano (2016): Responsabilidad de proteger: la ONU en acción. En Real Instituto Elcano. Documento de trabajo 2/2016. 15 de febrero 2016. Madrid 2016.
28. PEZZANO, Luciano (2012): La soberanía y la responsabilidad de proteger. Ed. Instituto de Relaciones Internacionales. Universidad de La Plata, Rep. Argentina. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 2012.
29. SUÁREZ, Francisco (1612): De legibus ac Deo Legislatore.
30. VATTEL, Emeric de (1758): Derecho de gentes. Ed. Lawalle joven, Brdeos 1822.